



El sector agroalimentario después de la COVID-19

EDUARDO MOYANO ESTRADA. (IESA-CSIC).

RESUMEN

Este artículo analiza y reflexiona sobre el escenario que se abre en el sector agroalimentario tras el coronavirus, mostrando algunas certezas y también algunas incertidumbres, destacando ciertas cuestiones que quedaron pendientes cuando, al decretarse el estado de alarma, se interrumpieron las movilizaciones de protesta de los agricultores.

PALABRAS CLAVE: COVID-19, coronavirus, sector agroalimentario.

A medida que ha ido avanzando la desescalada del confinamiento por la COVID-19, nos preguntamos cómo será nuestra vida social y económica después de la pandemia. En concreto, nos preguntamos qué cambios de los que hemos tenido que realizar en estos meses serán sólo coyunturales y desaparecerán cuando recuperemos la normalidad, y cuáles permanecerán incorporándose a nuestras actitudes y comportamientos sociales. Aún es pronto para saberlo, por lo que a día de hoy sólo pueden hacerse algunas reflexiones más o menos intuitivas y sin ánimo de presentarlas como afirmaciones cerradas.

En este artículo me centraré en el sector agroalimentario, y haré algunas reflexiones sobre el escenario que se abre tras el corona-

virus, mostrando algunas certezas, más también algunas incertidumbres, y en todo caso recordando ciertas cuestiones que quedaron pendientes cuando, al decretarse el estado de alarma, se interrumpieron las movilizaciones de protesta de los agricultores.

ALGUNAS CERTEZAS

Es un hecho cierto que el sector agroalimentario español ha asegurado el abastecimiento de alimentos durante el estado de alarma por el coronavirus. Como nunca antes, el sector ha estado sometido a una importante prueba de esfuerzo, que ha sido capaz de superar demostrando su capacidad para funcionar eficazmente en unas circunstancias tan excepcionales. Gracias a las diversas medidas adoptadas por el Gobierno y al compromiso de todos los agentes de la cadena alimentaria, se ha podido mantener la actividad agraria y han funcionado con normalidad los intercambios entre productores, industrias y comercio (mayorista y minorista), desempeñando Mercasa un papel fundamental.

Es también cierto que, debido a las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, ha habido problemas de mano de obra en algunas zonas y subsectores para la realización de determinadas labores agrícolas, al igual que ha ocurrido en otros países europeos. Pero se han ido subsanando no sin dificultad, gracias a la aplicación flexible por parte del gobierno de las normas sobre movilidad y gracias también a la implicación de las organizaciones agrarias. No obstante, en este tema es oportuno recordar que el trabajo agrícola es un asunto muy complejo, debido a su dureza, a la temporalidad y a los bajos salarios, por lo que, en la mayor parte de los países industrializados, se suele satisfacer con mano de obra inmigrante, cuya movilidad se ha visto restringida durante el estado de alarma. Ni siquiera en una situación tan excepcional como ésta, que ha enviado al desempleo a millares de trabajadores de la industria y los servicios, el trabajo agrícola ha resultado ser un sector refugio para los que se han quedado sin empleo o se han visto afectados por un ERTE, salvo casos muy contados.

Es una certeza, por tanto, que, después de la pandemia, el trabajo en el campo seguirá siendo desempeñado mayoritariamente por población inmigrante, lo que les plantea a los agricultores el reto de crear unas adecuadas condiciones de alojamiento para esos trabajadores temporeros. No basta con cumplir la legislación laboral, que nadie pone en duda, sino con cumplir con el imperativo moral de tratar con dignidad a cualquier ser humano, y los inmigrantes lo son, con todos sus derechos y deberes. Además, el trato a los inmigrantes temporeros es un factor decisivo en la reputación de los productos agrarios españoles en los mercados internacionales.

Otra certeza es la subida de precios en destino que ha tenido lugar en algunas producciones, lo que ha hecho que se amplíe la brecha respecto a los precios percibidos por los agricultores. Pero, en mi opinión, esto es algo coyuntural, debido a las especiales circunstancias ocasionadas por la pandemia y el estado de alarma. Esta situación de excepcionalidad ha hecho aumentar los costes tanto en el transporte como en la distribución,

Gracias a las diversas medidas adoptadas por el Gobierno y al compromiso de todos los agentes de la cadena alimentaria, se ha podido mantener la actividad agraria y han funcionado con normalidad los intercambios entre productores, industrias y comercio (mayorista y minorista), desempeñando Mercasa un papel fundamental



sin que tenga ello que ver, como algunos se han apresurado a destacar, con los efectos de la última reforma de la ley de la cadena alimentaria, aún pronto para evaluarla.

Una última certeza es el hecho de que ha sido la agricultura convencional, y en especial las pequeñas y medianas explotaciones, la principal abastecedora de alimentos a la población. Sobre los modelos agrícolas y ganaderos convencionales ha descansado, en efecto, la demanda de la población durante el confinamiento, canalizándose la producción a través de la cadena agroalimentaria hasta los puntos de compra. Los modelos no convencionales o alternativos, como los huertos familiares, han ejercido una función más de autoconsumo o de abastecimiento a mercados de proximidad, que se han visto limitados durante el estado de alarma, mientras que la agricultura ecológica ha continuado surtiendo a su habitual gama de consumidores. Al haberse mantenido el abastecimiento habitual de alimentos, las cuotas de mercado no se han alterado

sensiblemente, aunque sí ha aumentado el servicio on-line debido al confinamiento, siendo mayoritaria la presencia de la gran distribución en dicho servicio, dados los problemas logísticos del pequeño comercio.

ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES

Antes de la pandemia y la declaración del estado de alarma, las grandes movilizaciones de protesta expresaron el malestar de los agricultores. Pusieron de manifiesto cuestiones urgentes, que continúan estando presentes y que deben resolverse si queremos que nuestro sector agrario siga avanzando por la senda de la eficiencia y la modernización.

Precios, mercados e importaciones

Hay cuestiones, como las relativas al comercio y los mercados (precios justos, control de importaciones, venta a pérdidas, aranceles, almacenamiento privado...), que, como se recordará, fueron en esos meses, y continúan siéndolo, importantes reivindicaciones de los agricultores. Pero esas cuestiones, siendo sin duda relevantes, trascienden el ámbito de la producción agrícola y ganadera, yendo más allá de la capacidad de los agricultores para resolverlas, incluso del ámbito competencial del Ministerio de Agricultura.

Es verdad que una más eficiente vertebración económica del sector productor ayudaría a mejorar su posición en el mercado a la hora de relacionarse con otros agentes de la cadena alimentaria, pero también lo es que las cuestiones antes citadas exigen un tratamiento político transversal y no sectorial, con implicación de diferentes departamentos ministeriales, e incluso de la propia Comisión Europea.

Pensemos, por ejemplo, en el tema de la venta a pérdidas, que entra en el ámbito de los departamentos de comercio. O en el tema de las intervenciones para evitar mediante el almacenamiento privado la caída de los precios en origen (que

sólo están autorizadas para resolver problemas coyunturales y no estructurales de algún sector). Pensemos también en el problema de las importaciones de terceros países, que, como sabemos, responden a compromisos de la UE en el marco de acuerdos comerciales y sobre los que sólo se puede actuar velando por que se respeten las cuotas de entrada.

Además, en este tema de la entrada de productos foráneos en los mercados internos hay que tener claro que es el resultado de una economía abierta y globalizada que, si bien se ha cerrado en este periodo de pandemia por el coronavirus, volverá a abrirse más pronto que tarde, pues les interesa que sea así a economías como la europea, y en particular como la española, de vocación exportadora.

Por mucho que se elogie al sector productor español por el excelente papel desempeñado durante la pandemia de COVID-19, no tiene ningún sentido despertar falsas expectativas con mensajes autárquicos trasnochados. Al sector productor no le queda más opción que prepararse para ser eficiente en la nueva ola de mercados abiertos que sin duda llegará y que vendrá con nuevos controles, sobre todo sanitarios en los subsectores ganaderos, pero también en materia de insumos agrícolas y de alimentación animal.

Digitalización, relevo generacional y eficiencia energética

Pero hay cuestiones directamente relacionadas con el sector productivo que siguen estando pendientes y que continuarán formando parte de la agenda política después de la pandemia. Son cuestiones sobre las que el sector agrario (organizaciones agrarias, cooperativas, ministerio y consejerías de agricultura de CC.AA.) tiene un amplio margen de maniobra para actuar mediante iniciativas innovadoras y políticas apropiadas.

Me refiero, entre otras cuestiones, al relevo generacional, a la instalación de los jóvenes en la agricultura, a la digitalización y la eficiencia energética (especialmente, en el regadío, aunque no sólo). Estos vectores, que están interconectados, constituyen los grandes retos de la agricultura española si quiere seguir



Si eres un profesional de la alimentación tu sitio es **mercamadrid**

+2.700.000 de Tm.
productos comercializados

Área de influencia:

500 km.

12 mill. consumidores

Diariamente acceden:

20.000 personas

15.000 vehículos

Superficie:

2.215.060 m²



mercamadrid

A horizontal bar composed of several small squares in various colors: blue, red, green, yellow, blue, red, pink, grey, purple, teal, orange, and blue.

Por mucho que se elogie al sector productor español por el excelente papel desempeñado durante la pandemia de COVID-19, no tiene ningún sentido despertar falsas expectativas con mensajes autárquicos trasnochados. Al sector productor no le queda más opción que prepararse para ser eficiente en la nueva ola de mercados abiertos que sin duda llegará y que vendrá con nuevos controles, sobre todo sanitarios en los subsectores ganaderos, pero también en materia de insumos agrícolas y de alimentación animal

siendo un sector estratégico en nuestra economía después de la COVID-19. Veámoslos con algo de detenimiento.

Comencemos por la *digitalización*. Es una evidencia la necesidad de expandir la banda ancha de las telecomunicaciones en el medio rural, como lo fue en los años 1950 y 1960 extender la luz eléctrica por todo el territorio. Y lo es, no sólo por una cuestión de derechos de ciudadanía en un mundo tan interconectado como el de hoy, y porque abre la puerta a la diversificación económica y a la instalación de pequeñas y medianas empresas en los territorios rurales, sino también porque es una necesidad perentoria para avanzar en la modernización de la agricultura.

Sin digitalización, la agricultura no puede dar un salto cualitativo en su desarrollo hacia sistemas de mayor precisión y eficiencia en el uso de los factores productivos, como el agua y el suelo (para evitar la erosión), y en la utilización de los insumos (fertilizantes, pesticidas...). También es necesaria en el caso del sector ganadero para gestionar de forma eficiente la alimentación, la cría y el cebo de los animales. Además, la digitalización es hoy un factor esencial para organizar las estrategias comerciales y afianzar la posición de los productores en los mercados.

Y lo digo no sólo pensando en los modelos convencionales de agricultura y ganadería, o en las grandes y medianas explotaciones de tipo empresarial, sino también en sistemas alternativos, tales como los inspirados en la agroecología. Para estos otros modelos, la digitalización es tan necesaria para su viabilidad futura, como lo es para los de la agricultura más convencional. Por ejemplo, si pensamos en los mercados de proximidad no tenemos que asociarlos sólo a la proximidad física de los mercados locales abastecidos por los productores de la comarca, sino también a los intercambios entre productores y consumidores distanciados físicamente, pero cercanos gracias a las nuevas tecnologías digitales y a los sistemas de compra por internet y de distribución en los domicilios. Incluso en el campo de la producción ecológica, la digitalización puede ser un factor que contribuya a mejorar la eficiencia en el uso de los insumos agrícolas o en la alimentación del ganado.

Y ahora hablemos del *relevo generacional*. De poco sirve que se extienda la banda ancha de las comunicaciones y esté al alcance de los agricultores, si no hay productores dispuestos a poner en marcha proyectos innovadores. El envejecimiento de nuestra población agraria es una realidad incontestable (el 60% de los titulares tiene más de 55 años), por lo que es urgente promover el relevo generacional y la instalación de jóvenes agricultores si queremos una agricultura eficiente y competitiva en el futuro. Por eso, el papel de los jóvenes (sean hombre o mujeres) es decisivo en el reto de la digitalización, ya que, al estar formados en la cultura digital, están en mejores condiciones que los mayores para asumir dicho reto. De ahí la importancia de apoyar proyectos innovadores de instalación de jóvenes en la agricultura.

Cuando se saca a colación este tema, suele responderse que, sin una agricultura rentable y sin precios adecuados de los productos, la actividad agraria nunca será atractiva para los jóvenes, y que si algún joven osa instalarse como agricultor, el camino al fracaso lo tiene servido. Es ésta una respuesta de foto fija, ya que precisamente el proyecto de instalación debe ser un proyecto innovador destinado a cambiar las cosas no a seguir haciendo lo mismo que antes. La instalación de un joven en la agricultura tiene que hacerse sobre un proyecto dirigido a desarrollar una actividad agraria innovadora, más profesional y eficiente, más dispuesta a incorporar las nuevas tecnologías, más comprometida con la biodiversidad y el bienestar animal, más implicada en la lucha contra la erosión de los suelos y el cambio climático, y más decidida a participar en las nuevas estrategias de vertebración cooperativa e interprofesional. Sin esa actitud, y sin el apoyo necesario por parte de la política pública, es mejor no intentar la instalación.

En lo que se refiere a la eficiencia energética, el uso eficiente de los recursos hídricos en el regadío pasa también por aplicar las tecnologías digitales para avanzar hacia una agricultura de precisión que facilite el ahorro de agua, gestionando el riego a la demanda conforme lo vayan necesitando las distintas parcelas de la explotación. La eficiencia del riego

está, además, íntimamente conectada con los proyectos de instalación de jóvenes, ya que la viabilidad de estos proyectos pasa, en muchas ocasiones, por hacerlo en explotaciones de regadío, bien equipadas y tecnológicamente avanzadas. La eficiencia no es sólo en términos de sostenibilidad ecológica, sino también económica, dado el coste cada vez más elevado de la energía para extraer el agua desde las fuentes hídricas. Y en ese sentido, el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, facilitadas también por la tecnología digital, es otro tema pendiente de abordar en toda su dimensión.

Por todo ello, la incorporación de jóvenes es la clave de bóveda de todo el reto al que se enfrenta el sector agrario. Son ellos, los jóvenes, los que podrán imprimir un nuevo dinamismo a la agricultura española, tanto en la incorporación de nuevas tecnologías, como en la apuesta por estrategias comerciales innovadoras (incluidos también en esas estrategias los mercados de proximidad físicos o virtuales) y por modelos de vertebración más eficientes de cara a los exigentes retos del mercado. Sin relevo generacional no hay digitalización en la agricultura, ni mejora en el bienestar animal, ni compromiso en la lucha contra el cambio climático, ni avance en la eficiencia energética, ni recuperación de la biodiversidad, ni apuesta por modelos más eficaces de vertebración profesional.

La vertebración del sector agrario

Suele decirse que los agricultores son muy individualistas, y que eso explica las dificultades de contar con estructuras asociativas sólidas en el sector agrario. Pero la realidad es otra. A pesar de la intrínseca dispersión de los agricultores por la naturaleza diseminada de su actividad en el territorio, o quizá por la debilidad que ello conlleva, no hay otro sector como el agrario donde tenga mayor presencia el movimiento asociativo en sus diversas formas (cooperativas, comunidades de regantes, asociaciones de defensa sanitaria, organizaciones profesionales, interprofesiones, organizaciones de productores...). El problema es que no basta con estar asociado, sino que es necesario que la actividad asociativa sea eficiente para los propósitos que se persigue con ella.

Y ahí es verdad que el asociacionismo agrario muestra síntomas de debilidad para hacer frente a los grandes retos del siglo XXI. Hay ciertamente cooperativas, demasiadas cabría decir, pero la realidad es que están muy dispersas y atomizadas y no desempeñan con eficiencia el objetivo de concentrar la oferta y mejorar su posicionamiento en la cadena alimentaria.

La mejora de la vertebración cooperativa hacia modelos más eficientes de integración es, sin duda, una asignatura pendiente. Estrategias de fusión cooperativa o de concentración en estructuras de segundo grado, o el establecimiento de acuerdos comerciales entre cooperativas sin llegar a su concentración, son necesarias y de gran utilidad para mejorar la posición de los productores en los mercados, tal como se está demostrando en algunos sectores.

También es necesaria la consolidación de las interprofesiones para integrar de forma eficaz los intereses de productores



e industrias en torno a la defensa y promoción de un determinado producto, promoviendo la firma de contratos entre ambos agentes de la cadena. Algunas funcionan bien, pero otras interprofesiones lo son sólo de nombre y apenas tienen incidencia en el posicionamiento de su producto en el mercado.

Hay, por tanto, cuestiones pendientes en el campo de la vertebración agroalimentaria si queremos contar con un sector eficiente y competitivo. Y es ahí donde las organizaciones profesionales agrarias deberían desempeñar un papel significativo de impulso y apoyo a las iniciativas que surjan en este ámbito.

La incorporación de jóvenes es la clave de bóveda de todo el reto al que se enfrenta el sector agrario. Son ellos, los jóvenes, los que podrán imprimir un nuevo dinamismo a la agricultura española, tanto en la incorporación de nuevas tecnologías, como en la apuesta por estrategias comerciales innovadoras (incluidos también en esas estrategias los mercados de proximidad físicos o virtuales) y por modelos de vertebración más eficientes de cara a los exigentes retos del mercado

Investigación y transferencia

Es una realidad que, en materia de investigación y transferencia, la UE, en general, y España, en particular, se ha quedado bastante rezagada respecto a los cambios que se han producido en el campo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. La aprobación de la AEI por parte de la UE en el marco de la PAC 2014-2020, y la constitución de los “grupos operativos”, ha sido una forma de reconocer ese hecho y de intentar recuperar el tiempo perdido.

Hoy es aún más necesario abordar esta cuestión, dados los limitados frutos que se han obtenido en el actual periodo de programación. Además, hay que tener en cuenta que los resultados de las inversiones en materia de investigación y transferencia sólo pueden medirse en el medio y largo plazo, por lo que no se puede desistir de perseverar en esa apuesta.

España cuenta con una amplia estructura de centros públicos de investigación y transferencia, extendidos por todo el territorio: unos, dependientes de la administración central del Estado (como los centros del CSIC); otros, ubicados en las universidades; y otros, dependientes de las consejerías de agricultura de las CC.AA. El problema no es, por tanto, de falta de infraestructura, sino de ineficiente utilización y de ausencia de una adecuada coordinación entre los distintos centros, que permita el aprovechamiento de todo su potencial.

Es verdad que hay casos loables de departamentos científicos que desarrollan una labor muy positiva en determinados campos, como la mejora genética, la investigación de plagas y enfermedades, el regadío, la teledetección, la erosión y el laboreo mínimo, la alimentación animal... Pero son más el esfuerzo de grupos aislados, que no el resultado de planes coordinados de cooperación entre equipos científicos. Además, hay una manifiesta falta de conexión entre el sector privado y el sector público en este campo de la investigación y la transferencia, una disociación que debe ser dinamizada estableciendo puentes de cooperación entre ambos sectores.

Por eso, debe insistirse en continuar con la implementación de la AEI y la creación de “grupos operativos” para la resolución de problemas concretos que afectan al sector agroalimentario. Estos grupos son el marco idóneo para que se produzcan sinergias entre la comunidad científica, el sector productor y los agentes encargados de la transferencia. Todos los temas a los que hemos hecho antes referencia (digitalización, cambio climático, innovación, bienestar y sanidad animal, mejora genética, eficiencia energética, erosión, riego, alimentación animal, plagas y enfermedades, biodiversidad...) tienen cabida en el marco de la AEI y de los ya citados “grupos operativos”.

Y muy unido a ello, es muy necesario potenciar fórmulas de asesoramiento a los agricultores para incorporarlos al nuevo tren de la modernización y la transición ecológica y energética, tal como se hizo en los años 1960 del pasado siglo XX con el servicio de extensión agraria. Los servicios de asesoramiento de explotaciones que contempla la nueva PAC son una interesante oportunidad que no debiera desaprovecharse.



Los consumidores como input para la innovación

En los actuales sistemas alimentarios el papel desempeñado por los consumidores es un factor clave para orientar las producciones y las estrategias de los productores. Ya no es el consumidor ese sujeto pasivo que miraba los alimentos en las tiendas minoristas y decidía su compra guiado sobre todo por el precio. Ahora es un sujeto activo que ejerce su ciudadanía alimentaria como un derecho en sus hábitos de compra, eligiendo por el precio, pero también por la calidad y la trazabilidad de los productos. Es un consumidor cada vez más exigente con la información que le proporciona el etiquetaje y más crítico cuando la calidad no se corresponde con lo que se le informa desde la publicidad. La fidelidad del consumidor respecto a un producto o marca puede perderse en cuestión de días, si éste no satisface sus expectativas.

Por eso, los consumidores orientan hoy las producciones, y son un elemento a tener en cuenta por los agricultores a la hora de decidir qué y cómo producir. Es verdad que la mayor parte de los consumidores se relacionan con el sector productivo no de forma directa, sino mediante la distribución (tiendas, súper e hiper mercados), pero es también cierto que cada vez surgen iniciativas de relación directa entre productores y consumidores. Los circuitos cortos y los mercados de proximidad (tanto presenciales, como virtuales) son un buen ejemplo de esa relación directa, al igual que las plataformas asociativas integradas por consumidores y productores en el ámbito de la agroecología.

El caso de los llamados “mercados institucionales”, puestos en marcha en algunos países (como Brasil en el marco del programa “Hambre Cero”) y en algunas CC.AA. españolas (como el País Vasco) para acercar la producción de la agricultura familiar a determinados grupos de consumidores (comedores escolares, residencias geriátricas, cantinas militares...) son otro ejemplo de esto, un ejemplo que incluso encontró eco en el programa político acordado entre PSOE y Unidas Podemos para la formación del gobierno de coalición.

ALGUNAS INCERTIDUMBRES: LA NUEVA PAC Y EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

La principal incertidumbre de todo lo señalado hasta aquí radica en lo que pueda pasar con la PAC post-2020, que está justo ahora en la fase final de la negociación y que inevitablemente se verá afectada en términos financieros por el enorme esfuerzo que habrá de hacer la UE para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

Y en medio de todo ello, y para añadir más incertidumbre, se produce el pasado 20 de mayo la presentación, desde mi punto de vista inoportuna en plena pandemia, de las Estrategias “Biodiversidad 2030” y “De la granja a la mesa” (*Farm to Fork*), dentro del nuevo “Pacto Verde Europeo” (*Green Deal*). Y digo incertidumbre porque estas Estrategias marcarán la fase final de las negociaciones de la PAC post-2020. En todo caso, son estrategias que se plantean en el horizonte 2030 y que aún deben precisarse para despejar algunos temores que suscita en el sector de la producción agraria (por ejemplo, el objetivo de limitar de forma drástica el uso de pesticidas, de reducir la producción ganadera intensiva o de triplicar la superficie dedicada a la producción ecológica).

Sea como fuere, es indudable que los recursos necesarios para afrontar muchos de los grandes desafíos antes señalados

tienen que provenir de los fondos de la PAC. Especialmente los desafíos que afectan directamente al sector productivo, deben insertarse en el “plan estratégico nacional” de la PAC post 2020, un plan que permite colocar los temas agrarios en el centro de la agenda política.

Después de un largo periodo de tiempo en el que los gobiernos nacionales y regionales se limitaban a gestionar los programas de ayudas definidos en Bruselas, ya no va a ser así. La nueva PAC da a los gobiernos un amplio margen de maniobra para que sean ellos los que definan en sus respectivos “planes estratégicos” las acciones que, de acuerdo con unos objetivos generales marcados por la UE, consideren más adecuadas para avanzar en el relevo generacional, la modernización digital, la transición ecológica de su agricultura, la vertebración comercial... En la nueva PAC, los gobiernos nacionales (y los de las CC.AA.) tendrán oportunidad de hacer política agraria, lo cual es también una gran responsabilidad. Los aciertos o errores serán propios y no ajenos.

Sin duda que una de las muchas enseñanzas que podemos sacar de la crisis sanitaria de la COVID-19 es la importancia estratégica de disponer de un buen sistema agroalimentario a escala europea, con expresión concreta en cada país. Y esto se debe a la PAC. Contar con una red de explotaciones agrarias en condiciones de ser productivas, y con una cadena alimentaria organizada

¿CONÓCES “LA CHUCHE MÁS SANA”?



uvasdoce
grapes producer exporter importer



con relativa eficacia, tiene un valor incalculable para el conjunto de la sociedad europea. Esto es precisamente lo que ha permitido que no esté habiendo desabastecimiento de alimentos.

Pero mantenerlo y mejorarlo tiene un coste económico, que debe afrontarse en la futura PAC. Los “planes estratégicos nacionales” deben contemplar acciones que impulsen el salto de la agricultura europea hacia modelos más eficientes, más sostenibles y más comprometidos con el cambio climático. Y dada la gran diversidad del sector agrario de la UE, parece razonable que se dé un amplio margen de maniobra a los EE.MM. para que definan las estrategias más adecuadas a la realidad de sus respectivas agriculturas, siempre garantizando algún denominador común que permita poder seguir hablando del “modelo europeo” de agricultura, un modelo basado en explotaciones eficientes y tecnológicamente avanzadas, pero integradas en los territorios. Asimismo, es necesario integrar en los planes estratégicos acciones dirigidas a propiciar modelos innovadores de relación entre productores y consumidores, además de todo lo relacionado con la “economía circular”.

Pero todo eso tiene, como digo, un coste, y necesitará de voluntad política para apostar por ello en un momento tan complicado como el actual, en el que habrá una dura competencia por los recursos comunes de la UE. Y ahí radica, como he señalado, la principal incertidumbre del escenario posterior a la pandemia.

Sin embargo, no tendría sentido que los enormes recursos que deberán invertirse para la reconstrucción económica de la UE tras la COVID-19 salieran de recortar el presupuesto de la PAC. Sería absurdo, además de una mezquindad y de una decisión muy injusta, que la PAC viera reducidos sus fondos financieros después de haber demostrado que ha sido capaz de generar en la UE un sector alimentario eficiente y de calidad para el conjunto de la ciudadanía europea.

Son necesarios, sin duda, cambios internos en la distribución de los recursos de la PAC para hacerla más eficiente y más sos-

tenible en términos económicos y sociales. Pero sería un error menguar aún más un presupuesto ya de por sí insuficiente para afrontar los grandes retos del sector agroalimentario.

CONCLUSIONES

La pandemia de COVID-19 ha demostrado la fortaleza del sector agroalimentario en su conjunto, mostrando que la cadena alimentaria funciona en circunstancias tan excepcionales. Al mismo tiempo, los agricultores han dado muestras de una solidaridad sin límites, contribuyendo a tareas de desinfección para evitar la expansión del coronavirus y distribuyendo productos en los bancos de alimentos o en los domicilios de personas dependientes.

Pero, más allá de esta evidente muestra de fortaleza, el sector agroalimentario, y en particular el de la producción agraria, continúa afrontando los problemas de rentabilidad que se pusieron de manifiesto durante las grandes movilizaciones de protestas de finales del pasado año y primer trimestre de 2020.

El tema de los precios, las importaciones de países terceros, el dumping social y ecológico, la venta a pérdidas, el envejecimiento de la población agraria, la instalación de jóvenes, el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones, el reto de la digitalización, la *eficiencia energética*, las exigencias en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el bienestar y la sanidad animal, la mejora genética, la vertebración interprofesional... son cuestiones que aún están pendientes de abordar y que formarán parte de las reivindicaciones de las OPAs y que serán parte de la agenda política una vez que pase la pandemia de COVID-19.

Asimismo, las demandas de los consumidores se erigen hoy en un input de las estrategias de los productores, que deben adaptarse a aquéllas si quieren mantener una posición relevante en el mercado neutralizando la inevitable presencia de productos foráneos. Ello exige nuevas estrategias basadas en la calidad, tanto en el mercado convencional, como en los circuitos de ciclo corto o en los mercados de proximidad (sean físicos o virtuales).

Es un nuevo escenario que, si bien ya estaba definido antes del coronavirus, la pandemia lo que ha hecho es señalar algunas certezas, reforzando el papel estratégico del sector agroalimentario en temas de abastecimiento, mostrar algunos problemas pendientes, recordando la necesidad de no demorar más su tratamiento, y generar también alguna incertidumbre respecto a los recursos financieros disponibles.

Es, en definitiva, un escenario que debe enmarcarse en la nueva PAC post-2020 a través de los “planes estratégicos nacionales”, donde, gracias al amplio margen de maniobra que la UE otorga a los EE.MM., la agricultura retorna al centro de la agenda política, tanto europea, nacional como regional. Pero ello necesitará que nuestros gobernantes, en las distintas escalas territoriales, tengan amplitud de miras y traten al sector agroalimentario como lo que es, un sector esencial para asegurar el bienestar de la población. ■

